



## RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

### SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

**Medellín, veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)**

**PROCESO:** ORDINARIO LABORAL PRIMERA INSTANCIA  
**DEMANDANTE:** ANA MARÍA CÁCERES GARCÍA  
**DEMANDADO:** COLPENSIONES Y OTROS  
**RADICADO:** 050013105 013 2021 00038 01  
**ACTA No.:** 97

La Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ** y **JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por **ANA MARÍA CÁCERES GARCÍA** para pronunciarse sobre el recurso de apelación de **PORVENIR S.A.** y en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de **COLPENSIONES** frente a la sentencia con la cual el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 97** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

#### **1. LA DEMANDA<sup>1</sup>**

La DEMANDANTE pretende con este proceso básicamente lo siguiente: **i)** Que se **DECLARE** LA INEFICACIA DEL TRASLADO al RAIS administrado por SKANDIA S.A, al que igual que a los demás fondos privados a los que estuvo afiliada; y su afiliación permanente al RPM administrado por COLPENSIONES sin solución de continuidad. **ii)** Que se ORDENE a SKANDIA S.A. y a las demás AFP privadas en las que estuvo afiliada al traslado de todo el dinero depositado en la cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos, administración y demás dineros a COLPENSIONES, y a esta última recibirlos. **iii)** Que se CONDENE a lo ultra y extra petita que resulte probado en el proceso. **iv)** Que se reconozca el derecho de la pensión de vejez retroactiva desde el momento en que cumpla los requisitos legales, así como los intereses moratorios e indexación.

En sustento de sus pedimentos afirmó básicamente lo siguiente: **i)** La DEMANDANTE nació el día 19 de septiembre de 1965, y se encontraba afiliada al ISS, hoy

---

<sup>1</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia/ Archivo 05CumplimientoRequisitos / Págs. 2 – 16

COLPENSIONES. Sin embargo, firmo formulario de afiliación a COLFONDOS en 1994, a PORVENIR en 1997, nuevamente a COLFONDOS en 2001 y en 2016 a OLD MUTUAL, hoy SKANDIA. **ii)** Indica que tal cambio obedeció a una asesoría irregular, incompleta, sesgada que se le dio, en la que los asesores de las AFP omitieron el deber que les asistía pues no se le dejó en claro los perjuicios y efectos de tal traslado. **iii)** Adicionalmente, indica que se le mantuvo en error y no le avisaron a la actora acerca del error en el que había incurrido.

## 2. CONTESTACIONES

### 2.1. COLPENSIONES<sup>2</sup>

La administradora del Régimen de Prima Media **se opuso a todas y cada una de las pretensiones solicitadas en la demanda**, por carecer todas ellas de sustento fáctico y jurídico. Propuso como excepciones las que denominó: IMPOSIBILIDAD DE QUE COLPENSIONES DECRETE LA INEFICACIA Y/O NULIDAD DEL TRASLADO, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, POR AUSENCIA DE UNO DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, BUENA FE DE COLPENSIONES, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS, PRESCRIPCIÓN, INNOMINADA O GENÉRICA, COMPENSACIÓN.

### 2.2. PORVENIR S.A.<sup>3</sup>

La entidad se **opuso a todas y cada una** de las peticiones formuladas en la demanda que pretendan hacer recaer sobre ella cualquier tipo de consecuencia jurídica o económica, y solicitó se le absuelva de todas ellas. Propuso para su defensa las excepciones que denominó: PRESCRIPCIÓN, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD, COBRO DE LO NO DEBIDO POR AUSENCIA DE CAUSA E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, BUENA FE.

### 2.3. COLFONDOS S.A.<sup>4</sup>

La entidad **se opuso** a la prosperidad de las declaraciones y condenas en las que se le involucre, y en especial a la que declare la nulidad y/o ineficacia del traslado. Propuso para su defensa las excepciones que denominó: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, BUENA FE, INNOMINADA O GENÉRICA, AUSENCIA DE VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, VALIDEZ DE LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD, RATIFICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL ACTOR AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS ADMINISTRADO POR COLFONDOS S.A., PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA SOLICITAR LA NULIDAD DEL TRASLADO, COMPENSACIÓN Y PAGO.

<sup>2</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 22ContestacionColpensiones / Págs. 2 – 18

<sup>3</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 20ContestacionPorvenir / Págs. 3 – 27

<sup>4</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 21ContestacionColfondos / Págs. 4 – 18

## 2.4. SKANDIA S.A.

La AFP intervino de manera extemporánea y así se declaró con providencia del **21 de septiembre de 2021**<sup>5</sup>.

## 3. SENTENCIA<sup>6</sup>

En la audiencia del **13 de enero de 2023** la **JUEZ TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN** tomó las siguientes decisiones<sup>7</sup>: **i) DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación de la señora ANA MARÍA CÁCERES GARCÍA al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. Y SKANDIA S.A. **ii) CONDENÓ** a **SKANDIA S.A** a trasladar a COLPENSIONES dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo para el efecto cotizaciones, cuotas y/o gastos de administración vigentes a partir del 01/02/2016 exclusivamente por la afiliación de la señora ANA MARÍA CÁCERES GARCÍA, con los rendimientos que se hubieren causado, incluidos los **aportes para garantía de pensión mínima y los valores utilizados en seguros previsionales**, debidamente indexados. **CONDENÓ** a **COLFONDOS S.A.** a trasladar a COLPENSIONES en el mismo término las cuotas y/o gastos de administración entre el 1 de noviembre de 1994 hasta el 30 de septiembre de 1997 y del 1 de septiembre de 2001 hasta el 31 de enero de 2016, debidamente indexadas. Y a **PORVENIR S.A.** las cuotas y/o gastos de administración entre el 1 de octubre de 1997 hasta el 31 de agosto de 2001 debidamente indexadas. En concordancia, se ordena a COLPENSIONES a recibir tales sumas de dinero. **iii) CONDENÓ** a COLPENSIONES a activar la afiliación de la señora ANA MARÍA CÁCERES GARCÍA al régimen de prima media con prestación definida y a pagar dentro de los 4 meses siguientes al recibo de los dineros provenientes de COLFONDOS S.A., PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A. la pensión de vejez **en los términos del artículo 9 de la Ley 797 de 2003**, a partir del momento **en que se reporte el retiro** del sistema general de pensiones o de la última cotización. Deberá COLPENSIONES liquidar esta prestación económica conforme el IBL dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 tomando la alternativa más favorable para la señora demandante, ya sea el promedio de toda la vida laboral o de los últimos 10 años y liquidar la tasa de reemplazo conforme el artículo 34 de la Ley 100 de 1993. **iv) CONDENÓ** a COLPENSIONES a pagar a la señora ANA MARÍA CÁCERES GARCÍA dentro de los 4 meses siguientes al recibo de los dineros provenientes de COLFONDOS S.A., PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A. la indexación de las mesadas pensionales según la fórmula y directrices expuestas en la motivación. **vi) ABSOLVIÓ** a COLPENSIONES de las demás pretensiones de la demanda, **DECLARÓ** improbadas las excepciones de mérito propuestas por las demandadas y condenó

<sup>5</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 31

<sup>6</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 52ActaAudiencia7780

<sup>7</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 52ActaAudiencia7780 / Enlace [Archivo 52ActaAudiencia7780](#) / Min: 01:08:50 – 01:12:00

en **COSTAS** a cargo de PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. y SKANDIA S.A. en favor de la parte demandante.

#### 4. RECURSO DE APELACIÓN PORVENIR S.A.<sup>8</sup>

Se controvierten básicamente los siguientes aspectos: **i)** La declaración de ineficacia de traslado: a) La AFP cuenta con un soporte que da cuenta de la afiliación libre y voluntaria de la DEMANDANTE resaltando que el deber de información al tener un largo desarrollo en nuestro ordenamiento jurídico, implica que para el momento en que se efectuó el traslado horizontal a PORVENIR no le asistiera otro tipo de obligación más allá de guardar ese soporte documental. b) Señala no puede obligarse a los fondos de pensiones a cumplir obligaciones que no se encontraban vigentes para la época en que se celebró el acto jurídico que se está atacando en este tipo de procesos. PORVENIR brindó una información de carácter verbal a la demandante quien de forma libre la misma decidió diligenciar el formulario. c) El legislador también impone obligaciones a los afiliados en cuanto al deber de diligencia que estos tienen al realizar múltiples traslados. La demandante realizó diversos traslados horizontales dentro del RAIS y con ello existe de cierta forma una ratificación de la voluntad de pertenecer a ese régimen de pensiones. **ii)** En cuanto a las sumas que se ordenó trasladar resalta en cuanto a los **gastos de administración**, que PORVENIR los invirtió generando frutos y rendimientos que beneficiaron de cierta forma a la demandante incrementando el ahorro en la cuenta individual, por lo que no es dable que se retrotraigan estas que ya no están en el patrimonio de PORVENIR. En cuanto a los **seguros previsionales**, fueron sumas que en su momento se destinaron a un tercero que es la aseguradora y cubrieron las contingencias de invalidez y muerte: fue un servicio que ya se prestó y un dinero girado que tampoco podría PORVENIR devolver. Y respecto a la **indexación**, si bien con esta se busca resarcir el detrimento que el dinero va teniendo en el tiempo, PORVENIR con la gestión generó rendimientos financieros con los que se resarcir el detrimento.

#### 5. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia<sup>9</sup> intervino la apoderada de **SKANDIA S.A.** solicitando **REVOCAR** en su integridad la sentencia de Primera Instancia para en su lugar **ABSOLVERLA** de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda<sup>10</sup>; solicitud que deviene extemporánea porque de acuerdo a lo definido en el artículo 66 del Código Procesal del Trabajo modificado por el 10 de la Ley 1149 de 2007, la oportunidad procesal para interponer recurso de apelación es oralmente en la audiencia en que fue proferida la sentencia mediante sustentación estrictamente necesaria y allí mismo se concederá si es

<sup>8</sup> Carpeta 01PrimeraInstancia / Archivo 52ActaAudiencia7780 / Enlace [Archivo 52ActaAudiencia7780](#) / Min: 01:12:45 – 01:17:11

<sup>9</sup> Numeral 1 del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022/ 02AutoAdmiteCorreTraslado

<sup>10</sup> Carpeta 02Segunda Instancia / Archivo 03AlegatosSkandia1320210038 / Págs. 4 – 6

procedente. Así, se advierte que en la audiencia del pasado **13 de enero de 2023** **SKANDIA S.A.** se abstuvo de interponer recurso de apelación, sin que en manera alguna se la intervención en esta instancia la oportunidad para remediar tal omisión.

La apoderada de **PORVENIR S.A.** solicita **REVOCAR** en su integridad la sentencia de Primera Instancia para en su lugar **ABSOLVERLA** de todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda, incluyendo la **condena en costas** en primera instancia, aspecto que **no fue materia del recurso**<sup>11</sup>. Sobre lo apelado, en el alegato en esta instancia señaló: **i) Sobre la declaratoria de ineficacia del traslado:** a) Que en este asunto no se alegó ni probaron los eventos previstos en el artículo 1741 del Código Civil para declarar la nulidad absoluta o siquiera relativa del acto jurídico del traslado, lo que conduce a que este acto goce de plena validez. Tampoco se acreditan los presupuestos del artículo 271 de la Ley 100 de 1993 ni del artículo 897 del Código de Comercio, y agrega que pese a lo diáfano de las normas, "la H. Corte Suprema de Justicia realiza una mixtura para poder resolver las ineficacias de los traslados de régimen pensional" e insiste en que en este asunto **NINGUNO DE ESTOS PRESUPUESTOS LEGALES, SE ALEGARON NI MENOS RESULTARON DEMOSTRADOS EN EL PROCESO**, destacando que el formulario de afiliación suscrito por la parte actora es un documento público que se presume auténtico (arts. 243 y 244 del CGP y parágrafo del art. 54A del CPT, artículo 114 de la 100 de 1993 y artículos 246 y 272 del CGP) . b) **PORVENIR S.A.**, como Administradora de Fondo de Pensión, siempre le **GARANTIZÓ** a la parte demandante la posibilidad de retornar al régimen de prima media. La demandante, luego de recibir la información necesaria y suficiente decidió escoger el régimen de ahorro individual, hecho que se materializó con la suscripción del formulario de afiliación. PORVENIR aportó los documentos que de acuerdo con las normas existentes para el momento en que se celebró el acto jurídico del traslado debía mantener en sus archivos; además, pese a que la parte demandante JAMÁS estuvo en imposibilidad absoluta de retornar al RPMPD, permaneció en el RAIS, lo que sin duda al menos debe valorarse como un indicio serio de querer permanecer en el. c) Cuando se celebró el acto jurídico de vinculación con la demandante, PORVENIR únicamente debía dejar constancia de la libre escogencia a través del formulario de vinculación, sin que, también tuviera la NECESIDAD de registrar en documentos o a través de testigos o cualquier otro medio de prueba que, le SUMINISTRÓ la INFORMACIÓN NECESARIA Y OBJETIVA acerca de las condiciones y requisitos para acceder a la pensión de vejez a los futuros afiliados. Invoca la sentencia **SL1637-2022**. d) Sin realizar el análisis en conjunto y crítico de las pruebas como lo ordena el artículo 60 del C.P.T y S.S. el juzgador de primera instancia declaró la nulidad y/o ineficacia de traslado de RPM al RAIS efectuada por la AFP, sin consideración a las normas antes referidas del ordenamiento civil relacionadas con la validez de los negocios jurídicos (artículo 1602 del Código Civil). A continuación, plantea la diferencia legal de la ineficacia y nulidad de los actos jurídicos y sus efectos. **ii) Sobre las sumas a devolver:** a) Invoca el artículo 113 literal b)

<sup>11</sup> Carpeta 02Segunda Instancia / Archivo 04AlegatosPorvenir1320210038 / Págs. 3 – 9

de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1746 del CC así como la sentencia para concluir razonablemente que solo se traslada el valor de los aportes con los rendimientos que se hubieran causado en el RPMPD. **b)** Invoca los artículos 1746 y 964 del Código Civil, así como sentencia de la Sala de Casación Civil (*sentencia de 16 de septiembre de 2011, expediente No. 19001-3103-003-2005-00058-01*) para señalar que en atención al principio de la congruencia de la sentencia al no haberse discutido y menos probado la mala fe de PORVENIR S.A. en la celebración del acto jurídico de traslado, no puede condenarse a “restituir a favor del afiliado y por ende de un tercero como es COLPENSIONES”, los rendimientos financieros que logró por la gestión que adelantó en la administración de los aportes en el RAIS. **c)** Tampoco se debe ordenar la devolución de las primas de seguros por cuanto el afiliado SIEMPRE estuvo protegido en las contingencias que ellas amparan. Imponer esta obligación es tanto como exigirle a cualquier compañía de seguros que, si no se presenta el siniestro amparado, debe devolver, trasladar, reintegrar el valor de la póliza pagada.

La apoderada de **COLPENSIONES** plantea en esta instancia lo siguiente<sup>12</sup>: **i)** En primer lugar, en relación con la declaratoria de ineficacia, reitera que COLPENSIONES en el acto jurídico de afiliación que se llevó a cabo entre la afiliada y los Fondos Privados demandados, no tuvo incidencia alguna, ya que no participo del mismo; por lo tanto, los efectos jurídicos que surjan de este acto no lo pueden perseguir, ni mucho menos afectar. Así invoca el AI 1 de 2005 y el artículo 334 de la Constitución para sustentar la tesis de la inoponibilidad, señalando que la Seguridad Jurídica que de ella se deriva pretende proteger intereses patrimoniales de terceros que en este caso tiene un impacto directo frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y la planeación de la reserva pensional. **ii)** Solicita se realice un test o juicio de proporcionalidad destacando que no se acredita el criterio de “la necesidad” de la medida porque existen otros medios menos lesivos para mantener los derechos del afiliado y es que se haga cargo de las prestaciones económicas que se deriven de la declaratoria de dicha ineficacia la AFP a la cual se encuentra afiliada la demandante, insistiendo en que imponer esa carga en cabeza de COLPENSIONES tiene un impacto más lesivo para la sostenibilidad financiera del Sistema si se tiene en cuenta que es la única administradora del Régimen de Prima Media, alberga más número de pensionados y dichas pensiones se reconocen con subsidio de las arcas del Estado; de forma tal que se están solventando con estos recursos, el desmedro económico ocasionado por un particular, que en este caso son las AFP privadas, quienes incumplieron con su deber legal, tal como se pudo demostrar en el desarrollo de este proceso judicial. **iii)** En caso de no acoger la anterior petición, se solicita se ordene que el Fondo Privado realice la devolución y reintegro de las siguientes sumas: recursos de la cuenta de ahorro individual, cuotas de administración, cuotas abonadas al fondo de garantía mínima, rendimientos de la cuenta del demandante, anulación de bonos pensionales si existieren, porcentaje destinado al pago de seguros provisionales y gastos

<sup>12</sup> Carpeta 02Segunda Instancia / Archivo 05AlegatosColpensiones1320210038 / Págs. 3 – 6



de administración, adicionalmente que dichos valores se entreguen a mi representada; y que tales conceptos deben ser trasladados **de manera indexada** dada la evidente pérdida del valor de la moneda. Lo anterior de acuerdo a lo expuesto en las sentencias SL 4.964 de 2018, SL 4.989 de 2018, SL 1.421 de 2019 y SL 1.688 de 2019. **iv)** Solicita se CONFIRME que el reconocimiento pensional al que hay lugar a cargo de mi representada, solo se produce una vez se acredite el retiro efectivo del sistema tal como ordena la Ley así como la decisión referida a la absolución de la Entidad a las costas porque actuado siempre con sujeción a la Ley, es un tercero que no tuvo ninguna incidencia en el acto jurídico que se pretende declarar ineficaz; y que en este mismo sentido no haya condena en costas a cargo de la Entidad en esta instancia.

Pues bien, la Sala es competente para conocer del proceso sobre el recurso de apelación de **PORVENIR S.A.** y en virtud del grado jurisdiccional de **CONSULTA** a favor de **COLPENSIONES**, lo que impone efectuar el análisis en el siguiente orden lógico: En primer lugar, la evolución normativa sobre los DEBERES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES EN MATERIA DE ASESORÍA E INFORMACIÓN CLARA Y VERAZ para tomar la decisión de traslado de régimen inicial al RAIS. Así, se analizará en el CASO CONCRETO si debe CONFIRMARSE la DECISION de DECLARAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE REGIMEN del DEMANDANTE, verificando lo relativo a las sumas que se ordenan devolver. Para finalmente determinar lo relativo a la CONDENA a COLPENSIONES al reconocimiento de la PENSIÓN DE VEJEZ al régimen pensional aplicado y órdenes proferidas.

## **6. LOS DEBERES DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES EN RELACIÓN CON EL ACTO JURÍDICO DE AFILIACIÓN O TRASLADO.**

Esta Sala de Decisión ha tenido la oportunidad de expresar en varias oportunidades, que la decisión de un afiliado que estaba cotizando en el **I.S.S.** o en las otras Cajas de Previsión Social creadas antes de la Ley 100, **de trasladarse al RAIS**, exigía que la persona tuviese absoluta claridad en relación con su situación pensional, las diferencias entre cada uno de los regímenes, los beneficios e inconvenientes de cada régimen pensional y en especial, **los efectos que en su caso se generan si toma la decisión de trasladarse.**

El deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es exigible **desde su creación, y sin hacer distinción alguna**, de acuerdo a lo previsto en el **Decreto 663 de 1993**, aplicable a las AFP desde su origen, en el que se prescribió en el **numeral 1.º del artículo 97**, la obligación de las entidades de *«suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen.*

Es así como, conforme a lo previsto en el **artículo 271** en concordancia con el **literal b) del artículo 13 de la Ley 100**, los trabajadores tienen la opción de **elegir «libre y voluntariamente»** aquel de los regímenes que mejor le convenga y consulte sus intereses, y por ello, si alguna persona jurídica o natural atenta en cualquier forma contra el derecho de **afiliación** y

**selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social**, se genera como consecuencia la ineficacia de la afiliación.

En relación con este aspecto, la Sala laboral de la Corte Suprema ha desarrollado un precedente pacífico: **SL12136-2014, SL17595-2017, SL19447-2017, SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019, SL3464- 2019, SL4360-2019, SL2611-2020 y SL4806-2020, SL 2208 -2021 – SL 3871-2021- SL 5686-2021- SL 5688-2021- SL 1055-2022** que se apuntala en las siguientes premisas básicas:

- Si bien en los últimos años se ha intensificado la regulación, con lo previsto en la **Ley 1328 de 2009 artículos 3, 5, 7 y 9; Ley 1480 de 2011 artículo 23, Parágrafo 1o. del artículo 2° de la Ley 1748 de 2014**, y el **Decreto 2071 de 2015**, lo cierto es que la obligación de información clara y concreta previa al traslado se encuentra expresa en normas anteriores vigentes para la época en que se efectuó el traslado del demandante, **sin distinguir que tal deber sólo se refiera a los casos de las personas que eran beneficiarias del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100.**
- Para ello baste citar, **el artículo 13 en sus literales b) y k), el 106 y el 114 de la Ley 100**, en concordancia con lo previsto en el **artículo 97 del Decreto 663 de 1993 y la modificación introducida con la Ley 795 de 2003**, normas en las que se establece que la selección régimen se debe tomar de manera libre, espontánea y sin presiones como requisitos para poder afirmar su eficacia; así como la obligación de las AFP de suministrar a los usuarios la información necesaria para escoger las mejores opciones del mercado y tomar DECISIONES INFORMADAS.
- Siendo, así las cosas, antes del traslado el usuario debe conocer la lógica del RAIS y la esencia de su funcionamiento, sustentado en la capacidad efectiva del ahorro a lo largo de toda la vida para poder garantizar el derecho a una pensión. Y debe tener total claridad acerca de los aspectos relacionados no sólo con el monto y los requisitos de causación, sino la eventual opción de no acceder a esta prestación. Todos estos aspectos deben ser expresamente informados, para que el usuario pueda efectuar la comparación con las disposiciones que regulan el derecho pensional a los afiliados en el Régimen de Prima Media.
- En fin, significa entonces que la asesoría que debe brindar la Administradora de Pensiones en esa **ETAPA PREVIA Y PREPARATORIA** a la formalización de la información, no sólo debe ser completa y comprensible para el afiliado, sino que trasciende al “DEBER DEL BUEN CONSEJO” en los términos definidos por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en su precedente, deber que en los mismos términos fue acogido en el **artículo 3 del Decreto 2071 de 2015**, pues al mostrar con detalle las diferentes alternativas de la persona tras el análisis de su caso, mostrando los beneficios e inconvenientes de tomar la decisión de traslado, debe incluso ir más allá, para evitar que la persona tome una opción que claramente la perjudica.
- Y en relación con la carga probatoria, es claro que en los términos del **artículo 1604 del Código Civil**, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo y, ello no se agota solo con traer los documentos suscritos, sino la



evidencia de que la asesoría brindada fue suficiente para la persona, lo que no se satisface únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada atienda las pautas para que se adopte una decisión completamente libre. Por ello, de acuerdo con lo previsto en los artículos 97 y 98 del Estatuto Financiero vigente en 1994, referidos a la debida diligencia que debían emplear las AFP, no se trata únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición. Y es así como las sub reglas establecidas por la Alta Corporación definen que al momento de analizar si resulta procedente declarar la ineficacia de la afiliación: **a)** no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; **b)** en los términos del artículo 1604 del Código Civil corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones **allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados**, en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

- Finalmente, baste señalar cómo el criterio jurisprudencial orientador para este tipo de casos, fue plasmado en el **Código General del Proceso en el artículo 167**, norma en la que se consagra la posibilidad de distribuir la carga de la prueba a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar todo los elementos que ayuden a esclarecer el objeto del litigio y que en casos como el que hoy ocupa la atención de la Sala, no hay duda que la parte que debe cumplir con esa carga es el Fondo Privado: **a)** Maneja la carpeta con la historia de cada afiliado, con la información que le fue brindada al momento del trascendental acto del traslado o afiliación, **y la que se le ha entregado a lo largo de su permanencia en el fondo**, dirigida a orientarlo sobre las mejores opciones para que tome las decisiones que más le convengan; **b)** Conoce y tiene los datos de ubicación y preparación que recibió **el asesor** que tuvo a cargo la asesoría efectuada al afiliado y que hizo posible que éste firmara el acto jurídico de vinculación o de traslado al fondo de pensiones.

Por último, debe la Sala señalar que si bien, el precedente jurisprudencial se encuentra referido a casos de personas que se encontraban afiliadas a una administradora del Régimen de Prima Media y además, beneficiarias del régimen de transición, a quienes les afectó de manera considerable la decisión de traslado de régimen pensional; sin embargo, resulta evidente que la *Ratio Decidendi* de esas providencias resulta plenamente aplicable, a quienes eligieron el Régimen de Ahorro Individual por Primera Vez, porque lo relevante está, en que efectivamente se acredite dentro del proceso por la Administradora de Pensiones, que sí suministró la INFORMACION CLARA, COMPLETA, SUFICIENTE, en términos de transparencia y eficiencia.

7. EL CASO CONCRETO

7.1. LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN

Para efectuar el análisis se debe partir de las siguientes premisas no discutidas: i) **ANA MARÍA CÁCERES GARCÍA** nació el **19 de septiembre de 1965** por lo que en este momento cuenta con **58 años**<sup>13</sup>. ii) Se afilió inicialmente al RPM desde el **16 de febrero de 1989** hasta el **31 de octubre de 1994** régimen en el que cotizó de manera interrumpida con diferentes empleadores **248,86 semanas**<sup>14</sup>. iii) Se trasladó del REGIMEN DE PRIMA MEDIA al de AHORRO INDIVIDUAL suscribiendo formulario con solicitud de vinculación a **COLFONDOS S.A.** el **11 de octubre de 1994**<sup>15</sup>. Después se trasladó a la **PORVENIR S.A.** con solicitud de radicación del **29 de agosto de 1997**<sup>16</sup>. Posteriormente lo hizo a la AFP COLPATRIA, hoy PORVENIR S.A. el **11 de diciembre de 1998**<sup>17</sup>, regresó nuevamente a COLFONDOS S.A. el **26 de julio de 2001**<sup>18</sup> y finalmente se trasladó a SKANDIA S.A. el **30 de diciembre de 2015**<sup>19</sup>, donde se encuentra actualmente.

Hora de la consulta : 12:03:42 PM
Añilado: CC 39693814 ANA MARIA CACERES GARCIA

Vinculaciones para : CC 39693814							
Tipo de vinculación	Fecha de solicitud	Fecha de proceso	AFP destino	AFP origen	AFP origen antes de reconstrucción	Fecha inicio de efectividad	Fecha fin de efectividad
Traslado regimen	1994-10-11	2009/04/30	COLFONDOS	COLPENSIONES		1994-11-01	1997-09-30
Traslado de AFP	1997-08-29	2009/04/30	PORVENIR	COLFONDOS		1997-10-01	1999-01-31
Traslado de AFP	1998-12-11	2009/04/30	COLPATRIA	PORVENIR	COLFONDOS	1999-02-01	2001-08-31
Traslado de AFP	2001-07-26	2009/04/30	COLFONDOS	COLPATRIA	PORVENIR	2001-09-01	2016-01-31

4 registros encontrados, visualizando todos registros.
1

Las demandadas han afirmado a lo largo del proceso que la SELECCIÓN DE RÉGIMEN se tomó de **forma libre, espontánea y sin presiones** en los términos del formulario de afiliación suscrito por el actor, pero en criterio de la Sala, leyendas de este tipo no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, **acreditan un consentimiento, pero no informado**. En efecto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha precisado de forma reiterada que la suscripción de aquel documento, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos pre-impresos, tales como “la afiliación se hace libre y voluntaria”, “se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones” u otro tipo de leyendas de esta clase, son insuficientes para dar por demostrado dicho deber (CSJ: SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, reiterada en SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020).

Pues bien, según lo acreditado en el proceso, resulta evidente que para la fecha en la que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones para **ANA MARÍA CÁCERES GARCÍA** esta tenía menos de **35 años** de edad y **de 15 años de servicio**. Pero de acuerdo con el análisis efectuado en el **acápite sexto** de esta providencia y con el

<sup>13</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 05CumplimientoRequisitos / Pág. 23  
<sup>14</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 23ExpedienteActivoColpensiones / Pág. 298  
<sup>15</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 21ContestacionColfondos / Pág. 20  
<sup>16</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 20ContestacionPorvenir / Pág. 29  
<sup>17</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 21ContestacionColfondos / Pág. 20  
<sup>18</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 21ContestacionColfondos / Pág. 20  
<sup>19</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 26ContestacionSkandia / Pág. 34

precedente jurisprudencial sobre la materia, los promotores de la AFP ante la suscripción del formulario de traslado, **independiente de si la demandante era beneficiaria o no del régimen de transición**, tenía no solo el **DEBER** sino la **OBLIGACIÓN** de brindarle una **asesoría personalizada**, analizando **las circunstancias particulares, y mostrando aspectos concretos de su situación pensional**.

Como para la época en que suscribió el formulario no había entrado en vigencia la Ley 797, se le debió explicar que si permanecía en el I.S.S., el derecho a la pensión de vejez se causaría al arribar a los 55 años de edad y acreditando 1000 semanas cotizadas, para pensionarse con una mesada cuyo valor podría ser con una tasa del 85 % en caso de cotizar 1400 semanas, sobre un IBL integrado en los términos del artículo 21 de la Ley 100.

Y se le debió indicar además, que si se trasladaba para el RAIS, las condiciones pensionales serían las siguientes: **i)** Se podría pensionar antes de los 57 años, sin embargo tal circunstancia estaba sujeta a una condición y es que tuviera el capital suficiente para poder optar al menos por una pensión mínima (artículo 64 Ley 100); **ii)** Como la demandante tenía cotizaciones en el REGIMEN DE PRIMA MEDIA, debía saber que las cotizaciones que habían efectuado en el I.S.S. se verían representadas en un bono pensional tipo A que sólo **se redime en el caso de las MUJERES a los 60 años**, de manera que, si se daban las condiciones para pensionarse anticipadamente, habría que negociar el bono en el mercado financiero, disminuyendo su valor, lo que tendría efecto en el valor de la mesada, en la medida en que disminuiría el valor del capital para financiar la prestación. **iii)** Frente al valor de la pensión en el RAIS, se debió explicar que ésta depende del capital consignado en la cuenta individual y según la modalidad pensional elegida (artículos 79 a 82 de la Ley 100), y que el valor que se abonaría a la cuenta individual no sería equivalente al 100% de la cotización, porque una parte se destinaría a pagar la prima mensual de la compañía de seguros, a gastos de administración y al fondo de solidaridad del RAIS. **iv)** Y en relación con la ausencia de beneficiarios en materia de pensión de sobrevivientes y la posibilidad de que los dineros de la cuenta de ahorro individual se destinen a la masa hereditaria, se debió precisar que **ello no ocurre si la muerte se presenta siendo pensionado bajo la modalidad de renta vitalicia**. **v)** También se debía indicar, que en caso de que no completara el capital suficiente para obtener una pensión mínima (equivalente al 110% del salario mínimo a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones actualizado con el IPC), entonces **debían seguir cotizando hasta obtener 1.150 semanas y cumplir 57 años**, para poder acceder a la GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA, mostrando que esos dos requisitos eran superiores a los consagrados en el I.S.S. **vi)** Y que la GARANTÍA DE PENSIÓN MÍNIMA, es un beneficio que no se presenta en todos los casos porque está sujeto a unas condiciones y explicarle cuáles (artículo 84 de la Ley 100, vigente para la época), para que tuviese claro que, si no cumplía con ello, no obtendría

pensión de vejez y por ello, la entidad le devolvería los saldos que estuvieran en su cuenta individual, con el efecto que eso genera en relación con la afiliación en salud.

Pero se observa con claridad que en el proceso no se acreditó por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES el haber suministrado esta información clara, completa y detallada, y por esta razón, debe la Sala CONCLUIR, conforme las normas, jurisprudencia y acervo probatorio recaudado que ha de **CONFIRMAR** la decisión de **DECLARAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE REGIMEN**.

Lo anterior, sumado al hecho de que, el traslado que hubiese efectuado el demandante a otra AFP en manera alguna convalida la omisión en las obligaciones de información en la vinculación inicial al RAIS. La Corte Suprema en su Sala Laboral ha señalado en su precedente (**SL 5686 -2021, SL 1055 -2022**) que no puede desconocerse que un afiliado durante su vida laboral puede hacer varios traslados entre regímenes pensionales, o entre administradoras, sin que tal evento signifique que la AFP pueda omitir, en cada ocasión, el suministro de la información a que está obligada, con la calidad y en la oportunidad debidas so pretexto de una o varias vinculaciones anteriores. En la sentencia CSJ SL 3349 de 2021 expresó:

el hecho de tener sucesivas afiliaciones en el RAIS, después de haber abandonado el RPM, no tiene como consecuencia que de ello se derive una suerte de purga en el deber de información o de convalidación en su incumplimiento, tampoco el hecho de que el impugnante se haya vinculado, de manera discontinua al RAIS, aún con la misma administradora, significa *per se* que se tenga suficiente ilustración, conocimiento o comprensión de cada uno de los regímenes o que, se itera, tal situación releve del cumplimiento de sus deberes a la AFP, como lo exigen las normas aplicables en el momento en que acaezca tal evento.

Es decir, las administradoras siempre tendrán el deber de brindar información completa y veraz a los afiliados en cada vinculación, sin que pueda exonerarse de ella argumentando que el afiliado ya conocía previamente el régimen al que se vincula; Y sin que las sucesivas vinculaciones convaliden aquella que se hizo con vicios y dieron lugar a la declaratoria de ineficacia.

Debe destacarse que las ADMINISTRADORAS DEL RAIS y COLPENSIONES en la contestación propusieron la EXCEPCION de PRESCRIPCION, pero en el contexto que se ha venido analizando, debe señalarse que estamos en presencia de la ineficacia del traslado: Y una de las características esenciales de la inexistencia, es que es insubsanable por la prescripción - No adquiere vida por el transcurso del tiempo, por lo tanto, en cualquier tiempo puede ser alegada su inexistencia. En la sentencia **SL1688-2019**, reiterada en las **SL4360-2019 y SL 1055-2022**, la Sala Laboral de la Corte explicó con claridad sobre la inoperancia del medio exceptivo, no solo por su conexidad con un derecho fundamental e irrenunciable, sino porque el sustento fáctico del proceso da lugar a consolidar el status de pensionado, y, en consecuencia, propiciar la posibilidad del disfrute de un derecho económico no susceptible de extinción por el transcurso del tiempo.

Finalmente, **en relación con las sumas de dinero que se deben devolver**, debe señalarse lo siguiente: **i)** En la medida en que el legislador no previó un camino específico para declarar la ineficacia distinto al de la nulidad, la Sala Laboral de la CSJ en sentencias **SL1688, 3464 y SL 4360 de 2019**, así como en la **SL 2877 y SL 4811 de 2020** ha explicado que las consecuencias prácticas de la primera declaración son idénticas a la de la segunda (vuelta al *statu quo ante*). **ii)** Y como el precepto que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades es el **artículo 1746 del Código Civil** y este por analogía es aplicable a la ineficacia, según esta disposición, declarada la ineficacia, las partes, *en lo posible*, deben volver al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto de afiliación. **iii)** O, dicho de otro modo, el propósito es retrotraer la situación al estado en que se hallaría si el acto no hubiera existido jamás, es decir con ineficacia *ex tunc* (desde siempre). De no ser posible, es decir, cuando la vuelta al ***statu quo ante*** no sea una salida razonable o plausible, el juez del trabajo debe buscar otras soluciones que resarzan o compensen de manera satisfactoria el perjuicio ocasionado al afiliado, con ocasión de un cambio injusto de régimen. **iv)** Y en la medida que la ineficacia del acto de cambio de régimen pensional supone **negarle efecto al traslado**, tal situación solo es posible bajo **la ficción de que el mismo nunca ocurrió**. Luego, si una persona estaba afiliada al régimen de prima media con prestación definida, ha de entenderse que **nunca se cambió al sistema privado de pensiones**, y si estuvo afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad, ha de darse por sentado que **nunca se trasladó al sistema público administrado por COLPENSIONES**. **v)** Por esto mismo, en tratándose de *afiliados*, la Sala ha adoctrinado que los fondos privados de pensiones deben trasladar a COLPENSIONES la totalidad del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales a que haya lugar; así como **los gastos de administración, las comisiones (CSJ SL4964-2018, SL1688-2019, SL2877-2020, SL4811-2020 y SL373-2021)**, los porcentajes destinados a conformar el **Fondo de Garantía de Pensión Mínima** y los valores utilizados en **seguros previsionales** con cargo a sus propias utilidades (**CSJ SJ SL2209-2021 y SL2207- 2021**). **vi)** Así, reconoce esta corporación que si bien existió una administración por parte de las AFP, además del pago de seguros, producto de la declaratoria de ineficacia todos los recursos deben trasladarse a aquella administradora que tendrá a su cargo el reconocimiento de las eventuales pensiones, por cuanto tales sumas repercutirán en la conformación del derecho pensional, teniendo presente que el RPM es un fondo común al cual ingresan de forma indistinta los recursos de todos los afiliados y que a través del sistema de reparto intergeneracional, se cubren las prestaciones causadas. Por ello **COLFONDOS S.A., PORVENIR S.A y SKANDIA S.A.** efectuara la devolución en relación con los períodos en que estuvo afiliada. **vii)** Se destaca que ninguna de las devoluciones acá ordenadas se ve afectada por el fenómeno extintivo de la prescripción, excepción propuesta por las accionadas, la que a voces de la Sala de Casación Laboral de la CSJ no opera en estos litigios, dado el carácter irrenunciable del derecho pensional, que se extiende a la acción para reclamar su conformación con todos los aspectos conexos que le son



inherentes (CSJ SL1688-2019; CSJ SL12715-2014; CSJ SL 28479, 4 jun. 2008, CSJ SL 39347 y CSJ SL 8397, 5 jul. 1996. SL1688-2019, reiterada en las SL4360-2019 y SL 1055-2022). viii) Finalmente, para garantizar la SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA esta Sala de Decisión ordenaba que el monto trasladado no fuese inferior al valor total del aporte legal correspondiente en caso de que el afiliado hubiere permanecido en el régimen de prima media y si así fuere, la AFP asumiera el pago de la diferencia, aplicando el precedente definido por la Corte Constitucional en las sentencias **C 1024 de 2004**, y en las **SU 062 DE 2010** y **SU 130 de 2013** sobre los casos de las personas que regresan del RAIS al RPM. Pero reexaminando el asunto, y a partir del precedente vertido por la Sala de Casación Laboral en sentencias **SL 3202-2021, SL 2769-2021, SL3708-2021, SL 3710-2021- SL 3706-2021, SL 3571-2021, SL 3709-2021 y SL 1055-22**, considera que lo procedente para tal fin es ordenar **la devolución de tales sumas debidamente indexadas y con cargo a sus propios recursos**. Al momento de cumplirse los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen. Así, en este aspecto se ADICIONARÁ la providencia que se revisa.

## 7.2. LA PENSIÓN DE VEJEZ

Habiéndose concluido que en este caso procede la DECLARATORIA de INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN y decidido, que para todos los efectos legales la afiliada nunca se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y que, por tanto, siempre permaneció en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, pasamos ahora analizar la pretensión de la demanda dirigida a que se ordene a COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión de vejez a la actora.

Pues bien, en este caso esta corporación encuentra procedente la condena a COLPENSIONES al reconocimiento de la prestación por haber cumplido con los requisitos consagrados en el **artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993**.

En efecto, en relación con el régimen pensional de la demandante, se observa lo siguiente: **i) ANA MARÍA CÁCERES GARCÍA** nació el **19 de septiembre de 1965**<sup>20</sup>. **ii)** Tal como se indicó en el **acápito 7.1.** de esta providencia, no existe duda que la señora **CÁCERES GARCÍA** no es beneficiaria del régimen de transición, porque al 1 de abril de 1994 no había cumplido 35 años de edad ni 15 años de servicio; en consecuencia, su régimen pensional es el definido en la **Ley 797 de 2003**. **iii)** Y cumple con las exigencias del **artículo 9** acreditando más de **1300 semanas**<sup>21</sup> y la edad mínima de **57 años** que alcanzó el **19 de septiembre de 2022** fecha en la que se causó el derecho pensional, que por ser posterior al **31 de julio de 2011** genera el derecho a **13 mesadas al año** en los términos del **AL 01 de 2005**.

<sup>20</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 05CumplimientoRequisitos / Pág. 23

<sup>21</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 26ContestacionSkandia / Pág. 32



En relación con el DISFRUTE de la prestación, el **artículo 31 inciso segundo de la Ley 100** dispone que en esta materia resulta aplicable lo previsto en los **artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990**, porque la Ley 100 no reguló lo relativo a la CAUSACIÓN y DISFRUTE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. Y ha sido pacífico el entendimiento efectuado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en relación con la diferenciación entre estas dos categorías jurídicas, reiterando en innumerables oportunidades, que estas disposiciones consagran necesaria la desafiliación del sistema para que pueda comenzarse a pagar la pensión de vejez. Pero el precedente se ha decantado para enfatizar que la acreditación del retiro del sistema no amerita prueba solemne, y desde esa perspectiva, se puede verificar a partir del análisis del acervo probatorio, por ejemplo, cuando a pesar de que en la HISTORIA LABORAL no repose la Novedad de Retiro, la intención del actor de no seguir afiliado al sistema se pueda deducir o es constatable desde el momento en que dejó de cotizar<sup>22</sup>.

Pues bien, la HISTORIA LABORAL generada el **05 de febrero de 2021** muestra como última cotización la efectuada en **febrero de 2021**<sup>23</sup> así, al no haberse acreditado el retiro del sistema, se encuentra ajustada a derecho la decisión de ordenar a COLPENSIONES el reconocimiento de la pensión a partir del momento en que éste opere de manera expresa o tácita.

Del mismo modo, se verifica que en la sentencia se definieron con claridad los parámetros para definir el **valor de la mesada pensional** de acuerdo con lo previsto en nuestro ordenamiento: **i)** Para liquidar el **IBL** deberá hacerlo con fundamento en las reglas del **artículo 21 de la ley 100 del 1993**, es decir, con el promedio de todas los aportes realizados en toda la vida laboral o de los 10 últimos años actualizados con el índice del consumir certificado por el DANE, el que resulte más favorable: **ii)** Se aplicará la **tasa** de reemplazo establecida en el **artículo 34** de la **ley 100 de 1993** modificado por la **ley 797 de 2003** con el límite del 80% establecido en tal disposición (**SL 3501 de 2022**) a razón de 13 mesadas anuales. La entidad descontará del valor del retroactivo que se llegare a generar los aportes en salud, el que opera por mandato legal (**SL 1169 de 2019** y **SL1019-2020**)

### 7.3. COSTAS

Sobre las **COSTAS**, debe indicarse lo siguiente: **i)** En primera instancia condenó a COLFONDOS S.A., PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A. decisiones que no fueron cuestionadas **ii)** Y respecto a las **costas en esta instancia** al no prosperar el recurso interpuesto por **PORVENIR S.A.** serán a su cargo. Agencias en derecho 1 S.M.L.M.V.

<sup>22</sup> **SL2567-2018**. Radicación 58021 del 4 de julio de 2018. **SL3608-2018** del 18 de julio – Rad. 57021. **SL1744-2019** del 8 de mayo – Rad. 62362

<sup>23</sup> Carpeta 01PrimerInstancia / Archivo 26ContestacionSkandia / Pág. 42

## 8. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, **DECIDE:**

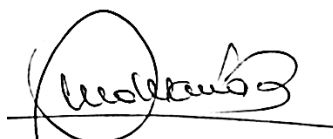
**PRIMERO:** Se CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, pero con las ADICIONES:

- Se ADICIONA el numeral **SEGUNDO** porque al momento de cumplir los órdenes por las **AFP COLFONDOS S.A., PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A.**, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, conforme lo explicado en la parte motiva de esta sentencia

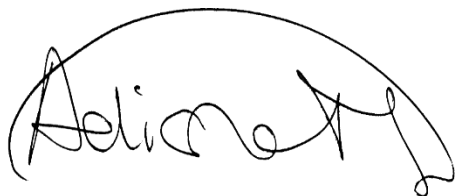
**SEGUNDO:** Se condena en COSTAS en esta instancia a PORVENIR S.A. Las agencias en derecho por una suma equivalente a 1 S.M.L.M.V.

Se ordena la notificación mediante EDICTO y vencido el término se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen. Se termina la audiencia y en constancia se firma por quienes intervinieron

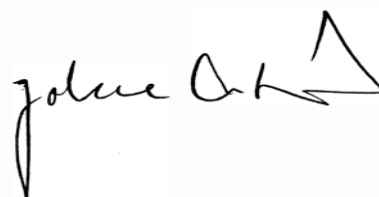
Los Magistrados,



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



**ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ**



**JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ**